

fortalecer la capacidad de diseño y gestión de proyectos y a promover el uso de los recursos del Programa entre sus potenciales beneficiarios; (ii) el desarrollo de actividades de evaluación periódica de cumplimiento de objetivos y de impacto del Programa; y (iii) el diseño del sistema de información, estadística y control de gestión del Programa y los proyectos.

**REVISION DE MEDIO
AMBIENTE Y
ASPECTOS SOCIALES:**

Durante el proceso de revisión de esta operación no se presentaron comentarios o recomendaciones especiales con respecto a su impacto ambiental o social.

BENEFICIOS:

El Programa tiene un impacto social importante ya que está encaminado a facilitar el acceso a la justicia y la formación ciudadana de los sectores sociales más vulnerables de la población (mujer, niños, jóvenes e indígenas).

El Programa contribuirá en establecer un mecanismo de participación de la sociedad civil y de mejora de las relaciones entre ésta y el Estado, al permitir que las organizaciones de aquélla ejecuten sus proyectos colaborando con el sector público en este campo.

RIESGOS:

El riesgo más importante para la ejecución del Programa se relaciona con la imparcialidad, transparencia y credibilidad que debe existir en la calificación de proyectos. Este riesgo se ve mitigado por la creación del Panel Consultivo y el Reglamento Operativo del Programa.

Además, el eventual desconocimiento de la existencia del Programa por parte de los potenciales beneficiarios y organizaciones que los representen podría afectar la demanda por el uso de los recursos del Programa. Este riesgo se ve mitigado por las labores de difusión contempladas y por las actividades de preidentificación de proyectos realizadas.

Otro riesgo se relaciona con la capacidad de ejecución de las organizaciones sociales participantes. Para minimizar este riesgo, el Programa contempla asistencia técnica destinada a fortalecer la capacidad de diseño y gestión de proyectos.

Por último, existe un riesgo relacionado con la sostenibilidad financiera de los proyectos que se apoyen y de las organizaciones solicitantes. Para minimizar este riesgo el Reglamento Operativo

permitirá velar por la continuidad de los proyectos, garantizar la sostenibilidad financiera de los mismos, demostrar solvencia institucional y evitar que se formen organizaciones con la finalidad exclusiva de acceder al Programa. Por ejemplo, la entidad participante deberá contar con otros recursos para su financiamiento, tener más de tres años de funcionamiento y realizar un aporte al proyecto, que como mínimo será de un 10%.

**ESTRATEGIA DEL
BANCO EN EL PAIS
Y EN EL SECTOR:**

La estrategia del Banco para Bolivia tiene como objetivo central la reducción de la pobreza y comprende tres líneas de acción: (i) crecimiento económico y creación de oportunidades para reducir los niveles de pobreza; (ii) desarrollo del capital humano y acceso a los servicios básicos; y (iii) gobernabilidad y consolidación de las reformas institucionales.

El Programa es consistente con esta estrategia, especialmente en lo que se refiere a contribuir al desarrollo del capital humano y a facilitar el acceso de los más pobres a los servicios básicos, así como a la consolidación de las reformas en apoyo a la modernización del Estado y al fortalecimiento de la sociedad civil.

Asimismo, el Programa es consistente con la estrategia global del Banco y con los esfuerzos de las distintas agencias de cooperación externa involucradas en el sector.

**CONDICIONES
CONTRACTUALES
ESPECIALES:**

Previo al primer desembolso del financiamiento, el Organismo Ejecutor deberá presentar a satisfacción del Banco, evidencia de: (i) haber suscrito un convenio subsidiario con el Ministerio de Hacienda que establezca los términos y condiciones de la transferencia de los recursos del financiamiento (párrafo 3.2); (ii) haber constituido la Unidad Técnica Ejecutora (UTE) con su personal seleccionado y haber establecido los mecanismos de manejo de los recursos del Programa (párrafo 3.5); (iii) que se ha seleccionado y conformado el Panel Consultivo, en los términos acordados con el Banco (párrafo 3.9); y (iv) que ha entrado en vigencia el Reglamento Operativo del Programa, en los términos acordados con el Banco (párrafo 3.10).

Se reconocerá con cargo a la contrapartida local, los gastos de contratación de la OEA para la selección y calificación de los integrantes del Panel Consultivo y del personal de la UTE, así como en el proceso de adquisición del equipamiento necesario para el

funcionamiento de esta última, por un valor de hasta el equivalente a US\$30.000 (párrafos 3.3 y 3.18).

**FOCALIZACION EN LA
POBREZA Y
CLASIFICACION DE
SECTOR SOCIAL:**

Esta operación califica como un proyecto orientado a la reducción de la pobreza y a la equidad social, como se describe en los objetivos claves para la actividad del Banco contenidos en el informe sobre el Octavo Aumento General de Recursos. Se estima que el Programa beneficiará directamente a alrededor de 20.398 personas provenientes de los grupos más pobres de la población, representando un 85,4% del total de personas que recibirían directamente atención con el Programa (párrafos 4.3 a 4.5).

**EXCEPCIONES A LAS
POLITICAS DEL
BANCO:**

El Programa no contempla excepciones a las políticas del Banco.

**ADQUISICION DE
BIENES Y
CONTRATACION DE
SERVICIOS DE
CONSULTORIA:**

Se aplicará la política vigente del Banco para la adquisición de bienes y la contratación de servicios de consultoría a ser financiados con recursos del Programa. Debido a que el monto máximo de los proyectos que financiará el Programa será del equivalente a US\$40.000, no se requerirá la aplicación del procedimiento de licitación pública internacional, ni para la adquisición de bienes ni para la contratación de servicios de consultoría. Respecto a los proyectos que financie el Programa, la Representación del Banco en Bolivia revisará ex-post el cumplimiento de los procedimientos de adquisiciones, en base al análisis de una muestra representativa de los mismos (párrafos 3.16 y 3.25).

I. ANTECEDENTES

A. Marco general

- 1.1 Los indicadores de desarrollo social de Bolivia se encuentran entre los más bajos de la región. De acuerdo con el Mapa de Pobreza del país, un 72,5% de la población se encuentra en situación de pobreza, es decir que percibe un ingreso que no permite cubrir sus necesidades básicas de vivienda, salud y educación, mientras un 33% se encuentra en extrema pobreza, vale decir que no está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimenticias mínimas. En las áreas rurales la situación es crítica, con un 90% de la población en condiciones de pobreza y 70% en extrema pobreza.
- 1.2 Los grupos más vulnerables de la población son las mujeres, los jóvenes, los niños y los pueblos indígenas (estos últimos representan aproximadamente el 60% de la población). Las tasas de analfabetismo de la mujer rural alcanzan el 50%. El 30% de los niños en áreas rurales no van a la escuela y sólo el 36% de los que inician el primer grado completan su educación.
- 1.3 En este contexto de pobreza y limitado grado de educación, el derecho y la justicia cobran especial relevancia para asegurar, entre otros aspectos, la paz social. Cada uno de estos grupos sociales demanda asistencia, orientación, defensa legal y resolución de sus conflictos. Respecto a los niños y jóvenes, los problemas más comunes son los de falta de filiación, maltrato y abandono, así como los de delincuencia juvenil. En las mujeres, estos incluyen temas de violencia familiar, abandono, abuso, desprotección, custodia de los hijos y discriminación laboral. En el caso de los indígenas, los temas críticos se relacionan con los derechos de propiedad y el respeto a sus usos y costumbres.
- 1.4 Existe un consenso, reflejado en la nueva normativa, que un número importante de estos asuntos podría resolverse fuera del sistema público, a través de distintos mecanismos alternativos de apoyo, orientación y resolución de conflictos de carácter extrajudicial. Por su parte, el acceso al sistema de administración de justicia de estos grupos sociales se ve limitado no sólo por la falta de recursos económicos, sino también por el poco conocimiento que tienen sobre sus derechos básicos y sobre los mecanismos existentes para exigir su cumplimiento.
- 1.5 La mayoría de los casos que se presentan al sistema quedan desatendidos. En materia de violencia contra la mujer y los niños, por ejemplo, se registraron en 1998 más de 80 mil denuncias, de las cuales sólo un 12% han sido resueltas, sea por acuerdos extrajudiciales o por acciones judiciales, mientras un 33% se encuentra aún en trámite. El 55% restante, alrededor de 44 mil casos, permanecen sin atención.
- 1.6 Conviene recalcar que las cifras del párrafo anterior se refieren a los casos denunciados y por consiguiente excluyen aquellos que

quedan sin denunciar, donde se oculta gran parte del problema. Esto implica que existe no sólo desconocimiento de los más pobres sobre el sistema, sino desconfianza, ya que se percibe la falta de mecanismos y medios adecuados para su acceso.

- 1.7 Para resolver este problema, el proceso de reforma judicial que se adelanta en el país, entre otros aspectos, legítima y promueve la participación de la sociedad civil en el sector. En este sentido, existe en Bolivia un número creciente de organizaciones de la sociedad civil que incluyen la prestación de servicios de asistencia o patrocinio legal, resolución alternativa de conflictos, sensibilización y capacitación entre sus actividades.
- 1.8 Para el diseño de la operación se examinaron 38 de estas organizaciones como muestra representativa. Un 37% de ellas ofrecen servicios exclusivamente en las áreas de asistencia legal y resolución alternativa de conflictos y un 18% en capacitación, difusión y sensibilización. El 45% restante ofrece servicios en todas las áreas mencionadas. A su vez, un 13% de estas organizaciones benefician exclusivamente a mujeres; un 11% a menores; y un 32% a indígenas. El 44% restante ofrece servicios indistintamente a más de uno de estos grupos. El siguiente cuadro presenta el detalle de la muestra analizada:

MUESTRA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE PARTICIPAN EN SECTOR JUSTICIA (Número de organizaciones por servicio que prestan y beneficiarios que atienden)				
Beneficiarios que atienden	TIPO DE ASISTENCIA: 1/			
	APR y CAP	APR	CAP	TOTAL
Mujeres	4		1	5
Menores	1	3		4
Indígenas	5	6	1	12
Mujeres y Menores	3	5		8
Mujeres e Indígenas	3		1	4
Mujeres, Menores e Indígenas	1		4	5
TOTAL	17	14	7	38

Tipo de servicios incluyen: Asistencia, Patrocinio Legal y Resolución Alternativa de Conflictos (APR); Capacitación, Difusión y Sensibilización (CAP)

- 1.9 El aporte de estas organizaciones en el sector es, sin embargo, incipiente y se ve limitado por falta de experiencia y recursos. Durante el período de preparación de la operación se detectó una importante demanda insatisfecha por parte de estas organizaciones, identificándose una muestra de 32 proyectos, los cuales agrupan una serie de tareas de asistencia que buscan resolver casos a través de defensa legal, mediación comunitaria, apoyo multidisciplinario a víctimas de violencia, capacitación y orientación ciudadana.

B. Marco normativo e institucional del sector

- 1.10 Las reformas estructurales de los últimos años persiguen la consolidación de un Estado descentralizado, regulador y participativo, como generador de condiciones para el desarrollo sostenible. Este proceso de reformas implica el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la promulgación de un nuevo marco normativo y una mayor vinculación del Estado con la sociedad civil.
- 1.11 En el ámbito de la justicia, las mencionadas reformas implican una profunda transformación institucional que apunta a resolver los problemas y limitaciones del sistema, así como a superar las barreras de acceso ciudadano al mismo y a atacar los niveles de corrupción. Ello ha abierto espacios, tanto para la acción responsable de las entidades de la sociedad civil en el sector, como para el reconocimiento de nuevos mecanismos de resolución de conflictos en las comunidades de base.
- 1.12 En este sentido, en 1993 se restableció el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (el cual había dejado de funcionar hace más de 100 años), a fin de que actúe como órgano rector estableciendo pautas para el funcionamiento del sector. Este ministerio ha estado abocado, entre otras actividades, a la elaboración de proyectos de ley de mejora del sistema de justicia, a la organización del sistema de defensoría pública que está bajo su responsabilidad y a la apertura de oficinas en zonas de alta conflictividad, a fin de promover el respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades públicas y privadas.
- 1.13 Se estableció el Tribunal Constitucional, para ejercer el control de la constitucionalidad, destinado a establecer de esa forma los límites al abuso del Poder Público y determinar la vigencia plena de los derechos y garantías individuales; el Consejo de la Judicatura, como órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial; y el Defensor del Pueblo, para velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector público, y por la defensa de los derechos humanos.
- 1.14 Por su parte, se otorgó independencia funcional a la Fiscalía General de la República, como ente encargado de representar a la sociedad y al Estado en la persecución de los delitos penales; y se promulgó un nuevo marco normativo que abre espacios de participación a organizaciones de la sociedad civil en temas tales como la conciliación y la atención de asuntos relacionados con la familia, la mujer, la niñez, la violencia doméstica y la justicia tradicional, comunitaria o indígena.
- 1.15 El marco legal que ha permitido viabilizar estos cambios está conformado, entre otras leyes, por la Constitución Política del Estado, el proyecto de Código de Procedimiento Penal, la Ley de Participación Popular, la Ley contra la Violencia en la Familia o

Doméstica, la Ley de Arbitraje y Conciliación y la Ley de Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo.

- 1.16 Se han creado instancias extrajudiciales de resolución de conflictos como las defensorías de la niñez y la adolescencia, las brigadas policiales de protección familiar y las fiscalías de la familia. Además, como se mencionó anteriormente, numerosas organizaciones no gubernamentales han empezado a brindar asistencia y orientación legal, así como a aplicar las nuevas normas referidas a conciliación y mediación. Asimismo, el Artículo 171 de la Constitución dispone que las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas podrán aplicar sus normas propias como solución alternativa de conflictos, de conformidad con sus costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a la Constitución y leyes nacionales.

C. Estrategia del Banco y participación de otras agencias de cooperación externa

- 1.17 La estrategia del Banco para Bolivia tiene como objetivo central la reducción de la pobreza y comprende tres líneas de acción: (i) crecimiento económico y creación de oportunidades para reducir los niveles de pobreza; (ii) desarrollo del capital humano y acceso a los servicios básicos; y (iii) gobernabilidad y consolidación de las reformas institucionales.
- 1.18 El Programa es consistente con esta estrategia, especialmente en lo que se refiere a contribuir al desarrollo del capital humano y a facilitar el acceso de los más pobres a los servicios básicos, así como a la modernización del Estado y al fortalecimiento de la sociedad civil. Asimismo, el Programa es consistente con la estrategia global del Banco y con los esfuerzos de las distintas agencias de cooperación externa involucradas en el sector.
- 1.19 Como resultado del mandato de la Octava Reposición de Capital del Banco, a partir de 1994 se ha puesto especial énfasis en la preparación y ejecución de proyectos en los sectores sociales, enfocados en la lucha contra la pobreza, así como en el área de la modernización del Estado y el fortalecimiento de la sociedad civil. En la actualidad, de 29 proyectos en ejecución en Bolivia, 10 corresponden al sector social, por un monto de US\$490 millones; y 7 a la reforma del sector público, por un monto de US\$107 millones. Sin embargo, no hay experiencia en proyectos que promuevan la participación de la sociedad civil en el sector justicia.
- 1.20 El apoyo externo en el sector justicia está dado principalmente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y por el Banco Mundial. Adicionalmente, cooperan con el sector la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los gobiernos de Alemania, Canadá, Dinamarca, España, Suecia y Suiza. Por su parte, la Embajada Real de los Países Bajos, con la participación de la Asociación Latinoamericana

para los Derechos Humanos (ALDHU), financió algunos estudios de diagnóstico especialmente en el área penal.

- 1.21 La mayor parte de los esfuerzos adelantados con el apoyo externo mencionado se encuentran enfocados básicamente en el desarrollo legislativo e institucional del nuevo marco constitucional, así como en las actividades de fortalecimiento de las instituciones involucradas.
- 1.22 La USAID ha asignado para el periodo 1998-2002 un monto de US\$2.100.000 para el sector justicia, incluyendo actividades de asistencia técnica para la elaboración de los textos legales constitutivos del Tribunal Constitucional y del Consejo Nacional de la Judicatura, así como para el inicio de la implantación del nuevo Código de Procedimiento Penal y los correspondientes planes de capacitación. El Banco Mundial ejecuta un proyecto de US\$12.750.000 (2705-BO) y se encuentra evaluando la posibilidad de preparar una segunda fase. Este proyecto apoya el sistema administrativo y organizacional del Poder Judicial, la implantación del Consejo de la Judicatura, la gestión de despachos civiles y el fortalecimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
- 1.23 El Gobierno revisó con el Banco los distintos proyectos que adelanta el sector justicia en el país y sus correspondientes planes de financiamiento, particularmente con la USAID y el Banco Mundial, a efectos de garantizar la complementariedad de las distintas iniciativas. En este sentido, se acordó que el apoyo del Banco se enfoque en aquellos aspectos complementarios sobre los que existen menos recursos comprometidos, relacionados con el acceso de la población más pobre de Bolivia a la justicia y el fortalecimiento de los canales de participación de la sociedad civil en el sector.

II. EL PROGRAMA

A. Objetivo

- 2.1 El objetivo del Programa consiste en facilitar el acceso de los sectores más vulnerables de la población a la justicia y al conocimiento de sus derechos, a través del fortalecimiento de los mecanismos de participación de la sociedad civil en el sector.

B. Descripción

- 2.2 Para el logro del objetivo, el Programa contempla dos componentes:

1. Proyectos de la sociedad civil (US\$2.260.000)

- 2.3 Este componente, al que se destinará la mayor parte de los recursos del Programa (75,3%), canalizará recursos a proyectos de entidades de la sociedad civil que tengan por objeto: (i) fortalecer y extender sus servicios de atención a sus beneficiarios en el área del acceso a la justicia; y (ii) la formación y capacitación sobre sus derechos a los sectores más vulnerables de la población.

- 2.4 En este sentido, los proyectos estarán encaminados a:

- a. brindar orientación jurídica y defensa legal a los beneficiarios; fortalecer las instancias donde se trabaje con medios alternativos de solución de conflictos, priorizando el desarrollo de la mediación vecinal y comunitaria; crear y prestar servicios multidisciplinarios de atención a víctimas de violencia; fortalecer los mecanismos de solución de conflictos propios de los pueblos indígenas; y apoyar, a través de organizaciones de la sociedad civil, actividades regionales del Defensor del Pueblo que cumplan los objetivos del Programa; y
- b. apoyar aquellas actividades que tengan como objetivo la capacitación en derechos ciudadanos; la difusión de los mismos a través de campañas contra la violencia familiar, el maltrato infantil o apoyo de las campañas de filiación e identidad; la capacitación de estudiantes de derecho y de trabajo social, escolares de escasos recursos y privados de libertad en lo referente a sus derechos y obligaciones; y la sensibilización de los agentes del Estado y de los operadores del sistema jurídico sobre la importancia del acceso a una justicia eficiente y eficaz, el respeto a los usos y costumbres de las comunidades campesinas e indígenas, y a los derechos humanos.

- 2.5 Para ello, los proyectos se clasificarían de la siguiente manera:

- a. **Asistencia y patrocinio legal:** estos proyectos estarían encaminados básicamente en la prestación de servicios profesionales de carácter multidisciplinario dirigidos a atender casos judiciales relacionados con niños víctimas de

abandono, maltrato o falta de filiación; menores infractores; mujeres víctimas de abandono o violencia; jóvenes con problemas de conducta o autores de delitos menores; privados de libertad; y comunidades indígenas que tramitan o defienden sus derechos de propiedad; y apoyar, a través de organizaciones de la sociedad civil, actividades regionales del Defensor del Pueblo.

- b. **Mecanismos alternativos de resolución de conflictos:** estos proyectos estarían encaminados, principalmente a través de la prestación de servicios profesionales de carácter multidisciplinario dirigidos al de asistencia técnica, hacia el establecimiento o fortalecimiento de centros de mediación comunitaria destinados a atender a los beneficiarios del Programa; y el apoyo a los mecanismos de resolución de conflictos de las comunidades campesinas e indígenas reconocidos por la ley.
 - c. **Capacitación:** estos proyectos estarían encaminados, principalmente a través de la realización de cursos y talleres, hacia la ejecución de actividades de capacitación y formación dirigidas a estudiantes de derecho, trabajo social, sicología y comunicación; escolares en escuelas públicas de zonas pobres; y a privados de libertad en lo referente a sus derechos y obligaciones.
 - d. **Difusión y sensibilización:** estos proyectos estarían encaminados hacia la realización de talleres y actividades de difusión dirigidos a: (i) los beneficiarios del Programa, a través de campañas contra la violencia familiar, el maltrato infantil o apoyo de las campañas de filiación e identidad; y (ii) los agentes del Estado en áreas relacionadas con el Programa y operadores del sistema jurídico, sobre la importancia del acceso a una justicia eficiente y eficaz, el respeto a los usos y costumbres de las comunidades campesinas e indígenas, y a los derechos humanos.
- 2.6 Para la presentación, aprobación y ejecución de proyectos, se contará con un Reglamento Operativo que establecerá los criterios de elegibilidad de las organizaciones, así como de elegibilidad y priorización de los proyectos, y los parámetros de evaluación de desempeño, seguimiento y sostenibilidad de los mismos. El Banco revisará la selección y aprobación de proyectos por muestreo aleatorio en forma ex-post.

2. Asistencia técnica (US\$150.000)

- 2.7 Los recursos correspondientes a este componente, que representan el 5% de los recursos del Programa, se utilizarán en:
- a. la realización de actividades de capacitación y difusión, especialmente destinadas a fortalecer la capacidad de diseño y

gestión de proyectos y a promover el uso de los recursos del Programa entre sus potenciales beneficiarios;

- b. el desarrollo de actividades de evaluación periódica de cumplimiento de objetivos y de impacto del Programa (párrafo 3.25); y
- c. el diseño del sistema de información, estadística y control de gestión del Programa y los proyectos.

C. Dimensionamiento y alcance del Programa

- 2.8 De acuerdo con el análisis que se llevó a cabo sobre una muestra de 32 proyectos de organizaciones de la sociedad civil en el área del acceso a la justicia, se prevé que el Programa tendría capacidad para atender un total de 83 proyectos, de los cuales 73 estarían orientados directamente a los beneficiarios - especialmente mujeres, niños, jóvenes e indígenas - con un costo promedio de US\$30.000 cada uno. Del análisis de la operación se prevé que alrededor de 15 de estos proyectos estarían en condiciones de tramitarse para su consideración en el Programa.
- 2.9 Se estima que 65 proyectos se destinarán a apoyar la solución de casos que permanecen en estado de denuncia sin ser atendidos actualmente por el sistema. Estos proyectos permitirán atender alrededor de 11.375 casos (175 por proyecto), beneficiando a 18.958 personas de acuerdo al siguiente cuadro:

Proyectos	Monto (US\$ miles)	Nº de Proyectos	Nº de casos	Beneficiarios
Mujeres	420	14	2.450	4.083
Niños	930	31	5.425	8.904
Jóvenes	210	7	1.225	2.042
Indígenas	390	13	2.275	3.929
Total	1.950	65	11.375	18.958

- 2.10 Por su parte, el Programa financiaría aproximadamente 8 proyectos de capacitación destinados al grupo objetivo, beneficiando a 1.440 personas de bajos ingresos en forma directa.
- 2.11 Adicionalmente, se financiarían alrededor de 10 proyectos por un costo estimado de US\$7.000 cada uno, destinados al desarrollo de actividades de capacitación de estudiantes y profesionales, y a la sensibilización de operadores del sistema jurídico, capacitando a 3.500 personas.

D. Costo y financiamiento

- 2.12 El costo total del Programa se estima en el equivalente de US\$3,0 millones, que se financiaría con un préstamo de US\$2,7 millones

(FOE) y una contrapartida de US\$0,3 millones, cuya distribución por fuente de financiamiento y categoría de inversión se muestra en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR COMPONENTE
(en US\$ miles)

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA	BID	LOCAL	TOTAL	Σ
<u>Gerencia y Administración del Programa</u>	391	88	479	16,0
1. Servicios de Consultoría(*)	352	33	385	
2. Equipamiento	39	11	50	
3. Apoyo Gral. y Servicios	0	44	44	
Proyectos de la Sociedad Civil	2.048	212	2.260	75,3
<u>Asistencia Técnica</u> (Servicios de Consultoría)	150	0	150	5,0
1. Difusión y Capacitación	80	0	80	
2. Diseño Sistema Información	10	0	10	
3. Evaluaciones	60	0	60	
SUB-TOTAL	2.589	300	2.889	96,3
<u>Otros Gastos</u>	111	0	111	3,7
1. Intereses y Comisión	42	0	42	
2. F.I.V.	27	0	27	
3. Auditoría Externa	20	0	20	
4. Imprevistos	22	0	22	
TOTAL GENERAL	2.700	300	3.000	100,0
Σ	90,0	10,0	100,0	

(*) Incluye US\$30.000 de aporte local por contratación OEA.

- 2.13 En adición, las organizaciones de la sociedad civil participantes en el Programa deberán contribuir con un mínimo de 10% del costo de cada proyecto, como uno de los requisitos para la sostenibilidad del mismo.

III. PRESTATARIO Y EJECUCION DEL PROGRAMA

A. Marco Institucional

1. Prestatario

- 3.1 El Prestatario será la República de Bolivia, representada en el contrato de préstamo por el Ministerio de Hacienda.

2. Organismo Ejecutor

- 3.2 El Organismo Ejecutor del Programa será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el que contará con una Unidad Técnica Ejecutora (UTE) dependiente del despacho del Ministro y, como instancia de aprobación de proyectos, se contará con un Panel Consultivo. El Prestatario suscribirá un convenio subsidiario con el Organismo Ejecutor que establezca los términos y condiciones para la transferencia de los recursos del financiamiento y contrapartida local. La suscripción de este convenio será condición previa al primer desembolso.

- 3.3 Se contratará, con cargo a la contrapartida local y en forma previa al inicio del Programa, los servicios especializados de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el propósito de garantizar transparencia y objetividad en el proceso de selección y calificación de los integrantes del Panel Consultivo, del personal de la UTE, así como en el proceso de adquisición del mobiliario y equipo necesario para su funcionamiento.

3. Unidad Técnica Ejecutora (UTE)

- 3.4 Se creará una Unidad Técnica Ejecutora (UTE), dirigida por un(a) coordinador(a) general, que será responsable del análisis, el seguimiento y la evaluación de los proyectos que presenten las organizaciones de la sociedad civil, así como de los aspectos contables y financieros de la ejecución del Programa.

- 3.5 La UTE estará dividida en las siguientes áreas, cada una de las cuales será responsabilidad de un(a) coordinador(a) especialista:

- a. El área técnica de análisis y seguimiento de proyectos: a cargo de diseñar y ejecutar un plan de difusión del Programa; prestar asistencia a las organizaciones de la sociedad civil; tramitar las solicitudes y documentación de los proyectos para ser sometidos al Panel Consultivo; realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos; identificar, preparar términos de referencia, contratar y supervisar los servicios de consultoría adicionales que se requieran en apoyo de sus funciones; y
- b. El área administrativo-financiera: a cargo, entre otros aspectos, de la administración financiero-contable de los

recursos; los trámites administrativos; los registros contables; y la gestión administrativa de los contratos.

- 3.6 La UTE estará integrada por personal altamente calificado, cuyos términos de referencia se incluyen en el Reglamento Operativo del Programa. La constitución de la UTE, con su personal seleccionado y los mecanismos de manejo de los recursos del Programa será condición previa al primer desembolso de la operación.

4. Panel Consultivo

- 3.7 Para asegurar imparcialidad en la aprobación y calificación de los proyectos que presenten las organizaciones elegibles de la sociedad civil, se creará como instancia resolutive independiente y representativa, un Panel Consultivo. Para la conformación de este Panel se tomaron en cuenta criterios de credibilidad del sector, conocimiento de la temática del Programa, pluralidad en su integración y cercanía con los grupos vulnerables.
- 3.8 En este sentido, se acordó con el Gobierno que el Panel estaría integrado por miembros provenientes de cada una de las siguientes entidades: (a) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que la presidirá; (b) Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS); (c) Asociación de Instituciones de Promoción y Educación (AIPE); (d) Conferencia Episcopal de Bolivia; y (e) Asociación de Periodistas de Bolivia. Cabe hacer notar que UNITAS y AIPE aglutinan a la mayor parte de las organizaciones sociales relacionadas con la temática del Programa.
- 3.9 Los integrantes del Panel Consultivo deberán cumplir con un perfil técnico determinado, el cual se incluye en el Reglamento Operativo del Programa, y se seleccionarán con base en ternas que enviarían cada una de las entidades mencionadas a través de los servicios de la agencia especializada. La selección del Panel Consultivo será condición previa al primer desembolso de la operación.

B. El Reglamento Operativo

- 3.10 El Programa cuenta con un Reglamento Operativo que establece los criterios de elegibilidad de las organizaciones participantes y de los proyectos, los parámetros de priorización y sostenibilidad de los mismos y los mecanismos de evaluación de desempeño y seguimiento. Previo al primer desembolso del financiamiento, el Organismo Ejecutor deberá presentar evidencia de que ha puesto en vigencia el Reglamento Operativo en los términos acordados con el Banco. Se resumen a continuación sus elementos principales:

1. Elegibilidad de las Organizaciones Participantes

- 3.11 Las entidades elegibles para presentar proyectos son asociaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales, organizaciones religiosas, organizaciones territoriales de base, universidades y colegios profesionales. Estas organizaciones deberán cumplir los

siguientes requisitos: (i) disponer de personería jurídica de acuerdo a las leyes bolivianas; (ii) tener una experiencia de no menos de 3 años; (iii) demostrar suficiente capacidad del equipo ejecutor; y (iv) demostrar que la situación financiera de la institución garantiza su continuidad en el sector. Tendrán prioridad aquellas instituciones que tengan mayor experiencia profesional en la materia de la propuesta y ofrezcan, cuando se requiera, mejores mecanismos de sostenibilidad del proyecto.

2. Etapas de Tramitación de Proyectos

- 3.12 El proceso de tramitación y ejecución de proyectos tiene cuatro fases: (i) una fase de difusión del Programa e identificación de proyectos, la cual incluye uso de medios de comunicación y realización de talleres; (ii) una fase de recepción de propuestas, donde se verificará la elegibilidad tanto del proyecto como de la institución que lo presenta; (iii) una fase de análisis y calificación, donde se aprobarán los proyectos de mayor prioridad; y (iv) una fase de ejecución, evaluación y seguimiento.

3. Elegibilidad de Proyectos

- 3.13 Para la priorización de los proyectos, se tomarán en cuenta criterios relacionados con: (i) el tipo de beneficiario que atiendan, buscando una amplia cobertura en el acceso a la justicia por parte de la población objetivo (ver matriz en párrafo 2.9); (ii) el grado de pobreza, favoreciendo a los beneficiarios más pobres; (iii) la relación del número de beneficiarios con el costo del proyecto, otorgando prioridad a los que benefician a un mayor número de personas al menor costo; (iv) la localización del proyecto, favoreciendo a proyectos que sean ejecutados en las áreas más pobres y más alejadas de la capital; y (v) la sostenibilidad, favoreciendo a las instituciones que garanticen una mayor continuidad de los proyectos que así lo requieran una vez finalizada su ejecución. El monto máximo de cada proyecto será del equivalente de US\$40.000.

4. Procesamiento de Proyectos

- 3.14 La UTE deberá realizar las siguientes actividades de tramitación de proyectos: (i) analizar y determinar la elegibilidad de las instituciones proponentes y ofrecer asistencia en su caso; (ii) analizar y revisar los proyectos para ver si cumplen los criterios de elegibilidad establecidos en el Reglamento; (iii) visitar la zona donde se va a ejecutar el proyecto y mantener reuniones con el equipo ejecutor; (iv) identificar para casos especiales la necesidad de contratar servicios de consultoría; y (v) tramitar las solicitudes que cumplen los criterios de elegibilidad, presentándolas al Panel Consultivo para su consideración final.
- 3.15 El Coordinador General de la UTE enviará, mínimo ocho días antes de la reunión del Panel Consultivo, las carpetas técnicas a sus miembros, en relación con cada propuesta que se vaya a evaluar, con

un resumen del proyecto presentado y un informe técnico que incluya la visita a la zona. El Panel se reunirá periódicamente, previa convocatoria de su Presidente, cuando la demanda por proyectos lo requiera. El Panel tendrá la facultad de aprobar o rechazar los proyectos presentados, aplicando los criterios de elegibilidad y de priorización establecidos. Los proyectos aprobados por el Panel serán remitidos a la UTE para su tramitación y ejecución.

- 3.16 Una vez aprobada la solicitud, la UTE celebrará un convenio con la organización respectiva, el cual normará la ejecución del proyecto y los derechos y obligaciones de las partes. Se seguirán los procedimientos del Banco para la adquisición de bienes y la contratación de servicios de consultoría de cada proyecto. La entidad solicitante hará entrega de una garantía bancaria o una póliza de garantía ejecutable por el equivalente al 100% del importe de cada desembolso que se le efectúe, ejecutable en caso de incumplimiento.
- 3.17 La UTE deberá supervisar la ejecución técnica de los proyectos, su administración contable y financiera, y evaluar su impacto. La Representación del Banco en Bolivia revisará el cumplimiento de los procesos de selección y aprobación de proyectos establecidos en el Reglamento Operativo, por muestreo aleatorio en forma ex-post.

C. Reconocimiento de gastos

- 3.18 El Banco reconocerá, como contrapartida local, gastos relativos a la ejecución del Programa relacionados con la contratación de la OEA como agencia especializada, por un valor de hasta el equivalente a US\$30.000, que se efectúen con posterioridad al 3 de febrero de 1998.

D. Período de Ejecución y Desembolsos

- 3.19 El período de ejecución del Programa se estima en 3,5 años y el de desembolsos en 4 años. El Programa se administrará como préstamo de cooperación técnica, de acuerdo al siguiente calendario de desembolsos:

CALENDARIO DE DESEMBOLSOS (en US\$ miles) 1/				
Años	BID/FOE	Gobierno	Total	Porcentaje
1º	544	752/	619	20,6
2º	761	75	836	27,9
3º	826	75	901	30,0
4º	569	75	644	21,5
Total	2.700	300	3.000	100,0

1/ El detalle de este cuadro se encuentra en los archivos técnicos del Programa.
2/ Esta cifra incluye reconocimiento de gastos por contratación OEA.

- 3.20 Los recursos del Programa serán desembolsados a través del Banco Central, que los depositará en una cuenta especial que se abriría en un banco comercial a nombre de la UTE. Si los depósitos generan intereses, éstos deberán invertirse en el Programa como parte de la contrapartida local y utilizarse para los fines del mismo.

E. Fondo Rotatorio

- 3.21 Para la ejecución de este Programa, que comprende alrededor de 80 proyectos dispersos geográficamente por montos que fluctúan entre US\$7.000 y US\$40.000 cada uno, y plazos de ejecución promedio estimados en 6 meses, el Fondo Rotatorio será de un 20% del financiamiento. Este porcentaje permitirá asegurar la flexibilidad necesaria para el buen desempeño del Programa, dando tiempo suficiente entre las reposiciones del fondo para mantener un ritmo de ejecución de proyectos acorde con los objetivos y metas planteados, así como para recoger la información requerida y preparar las solicitudes de reposición. Porcentajes menores implicarían continuas reposiciones, dificultando el manejo administrativo de la operación y limitando la capacidad de aprobar y ejecutar proyectos en los plazos establecidos.

F. Evaluaciones periódicas

- 3.22 El Programa contempla la contratación de servicios de consultoría internacional para llevar a cabo una evaluación semestral de cumplimiento de objetivos y ejecución del Programa, incluyendo elementos técnicos y financiero-contables. Estas evaluaciones incluirán el análisis por muestreo de algunos de los proyectos que se ejecuten con financiamiento total o parcial del Programa.

G. Auditoría Externa

- 3.23 Durante el período de ejecución del Programa y hasta la gestión correspondiente al informe final, el Prestatario presentaría los estados financieros auditados del Programa, dentro de los 120 días contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Los estados financieros serían auditados por firmas de contadores públicos independientes aceptables para el Banco. Adicionalmente, los auditores externos auditarán en forma selectiva y de acuerdo a sus procedimientos, una muestra representativa de los proyectos que hayan sido financiados (parcial o totalmente) con recursos del Programa.

H. Supervisión del Programa

- 3.24 La supervisión del Programa será efectuada por la Representación del Banco en Bolivia. Para estos efectos, se llevarán a cabo revisiones semestrales conjuntas con la UTE, a partir del primer semestre de ejecución, con base en las evaluaciones semestrales de cumplimiento de objetivos y los informes de auditoría financiera. En estas revisiones se: (i) evaluarán los avances en la ejecución del Programa; y (ii) analizará y acordará el plan de trabajo para

el semestre siguiente. Si en estas revisiones se determina necesario realizar ajustes en el Programa (como la posibilidad de aumentar el monto máximo de los proyectos o revisar el sistema de garantías), el Prestatario y el Organismo Ejecutor deberán adoptar las medidas que se acuerden con el Banco para ello.

I. Adquisición de Bienes y contratación de Servicios de Consultoría

- 3.25 Se aplicará la política vigente del Banco para la adquisición de bienes y la contratación de servicios de consultoría a ser financiados con recursos del Programa. Debido a que el monto máximo de los proyectos que financiará el Programa será del equivalente a US\$40.000, no se requerirá la aplicación del procedimiento de licitación pública internacional, ni para la adquisición de bienes ni para la contratación de servicios de consultoría. Respecto a los proyectos que financie el Programa, la Representación del Banco en Bolivia revisará ex-post el cumplimiento de los procedimientos de adquisiciones, en base al análisis de una muestra representativa de los mismos. El Banco se reserva el derecho a no reconocer los gastos que se hayan realizado en contravención a sus procedimientos de adquisiciones.

J. Evaluación de Impacto del Programa

- 3.26 El Programa contempla la realización de una evaluación de su impacto, a efectos de recoger las lecciones aprendidas de la experiencia en su ejecución y analizar la viabilidad de preparar una segunda etapa. La metodología a seguir en esta evaluación será definida en el primer año de ejecución del Programa, a fin de asegurar la recolección de información relevante para la misma durante su ejecución. Esta evaluación se contratará el último año de ejecución del Programa y será financiada con recursos del préstamo.

IV. IMPACTO, VIABILIDAD Y RIESGOS DEL PROGRAMA

A. Impacto Social

1. Marco general

- 4.1 El Programa tiene un impacto social importante ya que está encaminado, con la participación directa de organizaciones de la sociedad civil en su ejecución, a facilitar el acceso a la justicia y a la formación ciudadana de los sectores sociales más vulnerables de la población.
- 4.2 El Programa apoyará proyectos de asistencia y defensa legal, atención a víctimas de delitos y prevención de la violencia doméstica. Se facilitará asimismo la creación de mecanismos alternativos de solución de conflictos y se apoyará proyectos de capacitación y difusión de los derechos ciudadanos, y de sensibilización de los agentes del Estado y de los operadores del sistema de justicia.

2. Impacto sobre los Grupos de Bajos Ingresos

- 4.3 Atendiendo los criterios de elegibilidad de los proyectos que financiaría el Programa, se puede concluir que esta operación está orientada a beneficiar a los grupos más pobres de la población boliviana. Con base en las cifras presentadas anteriormente, el Programa beneficiará directamente a alrededor de 20.398 personas provenientes de estos grupos, a través tanto de actividades de atención y solución de sus conflictos como de actividades de capacitación. Esta cifra representa un 85,4% del total de personas que recibirían directamente atención con el Programa.
- 4.4 Cabe hacer notar que el Programa beneficiará además en forma indirecta a un número mayor de personas de bajos ingresos que el señalado anteriormente, a través, por ejemplo, del impacto que se espera obtener en el sistema jurídico con las actividades de capacitación y sensibilización.
- 4.5 En este sentido, tomando en consideración que más de un 50% de los beneficiarios potenciales de la operación serán pobres, esta operación se clasifica como inversión focalizada en la pobreza (PTI) y, por ende, dentro de la categoría de equidad social y reducción de pobreza.

3. Impacto en Aspectos de Género

- 4.6 El 21,5% de los proyectos que financiaría el Programa en materia de atención y solución de casos desatendidos por el sistema, estarán orientados en forma directa a la resolución de casos que afectan a la mujer (alrededor de 4.083 beneficiarias). Estos incluirán temas de violencia familiar, abandono, abuso, desprotección, custodia de los hijos y discriminación laboral.

4. Impacto en la Niñez y la Juventud

- 4.7 El 47,7% de los proyectos que financiaría el Programa en materia de atención de casos desatendidos por el sistema, estarán orientados a atender en forma directa casos que afectan a la niñez (alrededor de 8.904 niñas o niños de 0 a 16 años). El 10,8% de los proyectos atenderán directamente a jóvenes (alrededor de 2.042 beneficiarios de 16 a 21 años de edad). Estos proyectos incluirán temas relacionados con la falta de filiación, maltrato y abandono, así como delincuencia juvenil.

5. Impacto en Aspectos Indígenas

- 4.8 El 20% de los proyectos que financiaría el Programa en materia de atención de casos desatendidos por el sistema, estarán orientados a atender en forma directa casos que afectan a los indígenas y campesinos (alrededor de 3.929 beneficiarios). Estos incluirán temas relacionados con los derechos de propiedad y el respeto a sus usos y costumbres.

B. Viabilidad Institucional y Técnica

- 4.9 La demanda por proyectos que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos, el cumplimiento de los requisitos de capacidad institucional y el mecanismo de ejecución establecido para el Programa permiten asegurar la viabilidad institucional y técnica del mismo.
- 4.10 Bolivia tiene un número importante de organizaciones de la sociedad civil con capacidad en la gestión de proyectos relacionados con la temática del Programa, los cuales no encuentran regularmente recursos para su financiamiento. Adicionalmente, el Programa contribuiría con el fortalecimiento de aquellas organizaciones que pudieran participar en el Programa y presentan debilidad institucional para el diseño y gestión de proyectos.
- 4.11 El Programa permitirá el establecimiento de un mecanismo de participación de la sociedad civil y de mejora de las relaciones entre ésta y el Estado, al permitir que las organizaciones sociales ejecuten sus proyectos colaborando con el sector en la prestación de servicios de justicia, defensa y formación ciudadana. El Programa permitirá al Organismo Ejecutor el establecimiento de una red de organizaciones de la sociedad civil, que coadyuven con éste en sus labores de defensa pública y promoción del respeto a los derechos humanos.
- 4.12 El Programa permitirá iniciar actividades para que la población menos favorecida por los altos índices de pobreza que se han indicado anteriormente, tenga un mayor acceso a la justicia, a través de servicios legales formales como de medios alternativos de solución de conflictos. Asimismo, se permitirá adelantar proyectos de formación y capacitación ciudadana como mecanismo de prevención y de familiaridad de los ciudadanos con sus derechos básicos.

C. Viabilidad Financiera

- 4.13 La alta prioridad y compromiso dado por el Gobierno y particularmente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Programa, permite indicar que se dispondrá de los fondos de contrapartida necesarios.
- 4.14 Por su parte, cabe destacar que la sostenibilidad financiera será uno de los requisitos establecidos en el Reglamento Operativo del Programa, para que los proyectos que presenten organizaciones de la sociedad civil sean elegibles. Estas organizaciones deberán contribuir en el financiamiento de los proyectos con al menos un 10% del costo del mismo.

D. Riesgos

- 4.15 El riesgo más importante para la ejecución del Programa se relaciona con la imparcialidad, transparencia y credibilidad que debe existir en la calificación de proyectos. Este riesgo se ve mitigado por el mecanismo de ejecución establecido, que incluye la figura de una agencia especializada independiente para el proceso de selección del personal de la UTE y del Panel Consultivo; la creación del Panel Consultivo que será pluralista en su conformación y objetivo en sus procedimientos de aprobación de proyectos; y el Reglamento Operativo que establece los criterios de elegibilidad de las organizaciones solicitantes y de los proyectos.
- 4.16 Además de lo anterior, el eventual desconocimiento de la existencia del Programa por parte de los potenciales beneficiarios y organizaciones que los representen podría afectar la demanda por el uso de los recursos del Programa. Este riesgo se ve mitigado por las labores de difusión contempladas en el diseño de la operación y por las actividades de preidentificación de proyectos realizadas durante la preparación de la misma.
- 4.17 Otro riesgo se relaciona con la capacidad de ejecución de las organizaciones sociales participantes. Para minimizar este riesgo, el diseño del Programa contempla actividades de asistencia técnica destinadas a fortalecer la capacidad de diseño y gestión de proyectos a organizaciones de la sociedad civil que sean elegibles.
- 4.18 Por último, existe un riesgo relacionado con la sostenibilidad financiera de los proyectos que se apoyen y de las organizaciones solicitantes. Para minimizar este riesgo el Reglamento Operativo permitirá velar por la continuidad de los proyectos, garantizar la sostenibilidad financiera de los mismos, demostrar solvencia institucional y evitar que se formen organizaciones con la finalidad exclusiva de acceder al Programa. Por ejemplo, la entidad participante deberá contar con otros recursos para su financiamiento, tener más de tres años de funcionamiento y realizar un aporte al proyecto, que como mínimo será de un 10%.

ANEXO I

PROGRAMA DE SOCIEDAD CIVIL Y ACCESO A LA JUSTICIA (BO-0177) MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS												
lecer un mecanismo sostenible rticipación de la sociedad y de mejora de las relaciones ésta y el Estado, en materia sticia y mecanismos de ución de conflictos.	<ul style="list-style-type: none">● Sistema institucional en funcionamiento que permita que organizaciones sociales ejecuten proyectos colaborando con el sector público en la prestación de servicios de justicia, defensa y formación ciudadana.● Apoyo institucional y presupuestario del Estado.	<ul style="list-style-type: none">● Informes de organizaciones de la sociedad civil.● Presupuesto del Gobierno.● Informes de evaluaciones ex-post.	<ul style="list-style-type: none">● Voluntad y compromiso político.● Esquema de ejecución exitoso y mecanismos adecuados de sostenibilidad de los proyectos.● Organizaciones de la sociedad civil con capacidad y dinámica de diseño y ejecución de proyectos.● Voluntad política de aplicación de la normativa vigente en las materias que apoya el Programa.												
OSITO: itar el acceso de los sectores vulnerables de la población a sticia y al conocimiento de derechos, a través del alecimiento de los mecanismos participación de la sociedad en el sector.	<ul style="list-style-type: none">● 83 proyectos de la sociedad civil ejecutados y desembolsados en 4 años, con la participación de aproximadamente 40 organizaciones. <p>-65 proyectos para resolución de casos:</p> <table><tr><td>Beneficiarios</td><td>No. Casos</td></tr><tr><td>4.083 mujeres</td><td>2.450</td></tr><tr><td>8.094 niños</td><td>5.425</td></tr><tr><td>2.024 jóvenes</td><td>1.225</td></tr><tr><td><u>3.929 indígenas</u></td><td><u>2.275</u></td></tr><tr><td>18.958 benef.</td><td>11.375</td></tr></table> <p>- 8 proyectos de capacitación directa a 1.440 beneficiarios.</p> <p>- 10 proyectos de capacitación indirecta a 3.500 estudiantes y profesionales.</p>	Beneficiarios	No. Casos	4.083 mujeres	2.450	8.094 niños	5.425	2.024 jóvenes	1.225	<u>3.929 indígenas</u>	<u>2.275</u>	18.958 benef.	11.375	<ul style="list-style-type: none">● Informes técnicos de avance en la ejecución del Programa y de los resultados de los ejercicios de evaluación y seguimiento emitidos por la UTE.● Informes técnicos de las misiones de administración del Equipo de Proyecto del Banco.	<ul style="list-style-type: none">● Pluralismo, objetividad y capacidad técnica del Panel Consultivo.● Calidad técnica del personal de la UTE.● Percepción de imparcialidad en calificación de la elegibilidad de organizaciones y proyectos.● Organizaciones de la sociedad civil con capacidad y dinámica de diseño y ejecución de proyectos.● Voluntad política de aplicar la normativa vigente en las materias que apoya el Programa.
Beneficiarios	No. Casos														
4.083 mujeres	2.450														
8.094 niños	5.425														
2.024 jóvenes	1.225														
<u>3.929 indígenas</u>	<u>2.275</u>														
18.958 benef.	11.375														

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
<p>OBJETIVOS:</p> <p>Financiamiento de proyectos de sociedad civil; y fortalecimiento de la capacidad de diseño y gestión de proyectos por parte de organizaciones de la sociedad civil.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 83 proyectos desembolsados y ejecutados. ● Consultorías de asistencia técnica contratadas y ejecutadas por US\$80.000 (US\$50.000 el 1er año de ejecución, US\$20.000 el 2º y US\$10.000 el 3º). 	<ul style="list-style-type: none"> ● Informes técnicos de avance en la ejecución del Programa y de los resultados de los ejercicios de evaluación y seguimiento emitidos por la UTE. ● Informes técnicos de las misiones de administración del Equipo de Proyecto del Banco. ● Registro contable de la UTE. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Capacidad técnica del personal involucrado y mecanismos adecuados de independencia y autonomía en ejecución del Programa. ● Aplicación del Reglamento Operativo. ● Interés y apoyo de las organizaciones de la sociedad civil elegibles. ● Voluntad política y apoyo de las autoridades nacionales.
<p>ACTIVIDADES:</p> <p>Instalación del marco institucional de ejecución del Programa (UTE; Panel Consultivo; Reglamento Operativo; y dotación de recursos, materiales y equipos); diseño de software; difusión y capacitación a organizaciones potencialmente elegibles; recepción, análisis y dotación de proyectos elegibles; ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos; y evaluación impacto del Programa y análisis sobre la viabilidad de una segunda etapa de financiamiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Marco institucional instalado dentro del mes de iniciado el Programa y funcionando durante todo el período de ejecución (incluye actividades (i) (iii), (iv) y (v): UTE: US\$352.000 Panel Consultivo: US\$ 3.000 Gastos operación: US\$ 94.000 Total: US\$449.000 ● Reconocidos gastos de contratación OEA por US\$30.000. ● Sistema de información diseñado e instalado US\$10.000. ● Proyectos aprobados de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento Operativo del Programa: 1er. año: 14 US\$374.000 2º año: 31 US\$838.000 3er. año: 38 US\$1.048.000 Total 83 US\$2.260.000 ● Consultorías evaluación semestral y de impacto, y auditoría realizadas US\$80.000. La definición de metodología y parámetros de evaluación se contratarán con el primer desembolso. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Registro contable de la UTE. ● Informes Agencia Especializada. ● Informes de auditoría y evaluación. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Apoyo de las autoridades nacionales especialmente en el esquema institucional y asignación presupuestaria de contrapartida oportuna. ● Cumplimiento de los procedimientos establecidos y acordados con el Banco. ● Demanda suficiente por parte de la sociedad civil. ● Compromiso de recursos y evaluación permiten realizar desembolsos.

PROYECTO DE RESOLUCION

BOLIVIA. PRESTAMO /SF-BO A LA REPUBLICA DE BOLIVIA
PROGRAMA DE SOCIEDAD CIVIL Y ACCESO A LA JUSTICIA

El Directorio Ejecutivo

RESUELVE:

Autorizar al Presidente del Banco o al representante que él designe, para que en nombre y representación del Banco proceda a formalizar el contrato o contratos que sean necesarios con la República de Bolivia, como prestatario, para otorgarle un préstamo destinado a cooperar en el financiamiento de un Programa de Sociedad Civil y Acceso a la Justicia. Dicho financiamiento será por una suma de hasta US\$2.700.000 o su equivalente en otras monedas, excepto la de Bolivia, que formen parte de los recursos del Fondo para Operaciones Especiales del Banco, y se sujetará a las "Condiciones Contractuales Especiales" y a los "Plazos y Condiciones Financieras" del Resumen Ejecutivo de la Propuesta de Préstamo.